



Year 1901—Office, Fortaleza 21

Año 1901—Oficinas, Fortaleza 21.

Official subscriptions	\$1.75 per month
Private	1.25 —
Single copy (date of issue).....	.10
— (old date).....	.20
Advertisement10 per line

Subscripción oficial por un mes.....	\$ 1.75
Subscripción particular por un mes.....	1.25
Número suelto del día.....	.10
Número atrasado.....	.20
Anuncios la línea10

Published daily except Mondays

Se publica diariamente menos los Lunes

Entered at the P. O. at San Juan P. R. as Second class matter.

Year 1901

San Juan Puerto-Rico, Sunday May 26th

No. 123

PARTE OFICIAL

EXECUTIVE COUNCIL.—Porto Rico.

San Juan, May 11, 1901.

ASSESSMENT OF TAXES

NOTICE

of

SITTING OF BOARD OF APPEAL

Notice is hereby given that Pursuant to the provisions of an Act to provide revenue for the people of Porto Rico and for other purposes, approved January 13, 1901, The Executive Council of Porto Rico will, on Wednesday May 15th, 1901, at 10:30 o'clock, sit as a Board of Appeal to decide appeals by persons agrieved by the decisions of the respective Boards of Review.

All appeals shall be made in manner provided by law and within twenty days from May 15th, 1901, which will be the first sitting of the said Executive Council for the purposes herein before set forth.

J. R. Garrison,

President pro tem.

W. R. Bennett,

Acting Chief Clerk.

CONSEJO EJECUTIVO.—Puerto-Rico.

San Juan, 11 de Mayo de 1901.

TASACION PARA CONTRIBUCIONES.

AVISO.

SESION DE LA JUNTA DE APELACION.

Por la presente se avisa que en cumplimiento de lo que dispone la ley para proveer de renta al pueblo de Puerto-Rico y para otros fines, aprobada el 13 de Enero de 1901, el Consejo Ejecutivo de Puerto-Rico celebrará sesión como Junta de apelación, el Miércoles, 15 de Mayo de 1901, á las diez y media, para decidir las apelaciones de las personas que se crean perjudicadas por las decisiones de las respectivas Juntas de Revisión.

Todas las apelaciones han de hacerse en la forma dispuesta por la ley, y dentro de 20 dias desde el 15 de Mayo de 1901, cuando tendrá lugar la primera sesión del Consejo Ejecutivo para los fines arriba expresados.

J. R. Garrison,

Presidente interino.

W. R. Bennett,

Secretario sustituto.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DE PUERTO-RICO.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico á treinta y uno de Diciembre de mil novecientos, en el juicio declarativo de menor cuantía seguido en el suprimido Juzgado de 1ª Instancia de Mayagüez y en el Tribunal del Distrito de San Juan, por Don Ramón Irizarry en representación de su legítima esposa Doña María Antonia Cuevas y Mangual, vecinos de Mayagüez, con Don Damián Frontera, comerciante de la misma vecindad, sobre cobro de pesos, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, juicio pendiente ante Nos en virtud de recurso de casa-

ción, por infracción de ley, interpuesto por la parte demandada y en su defensa y representación por el letrado Don Rafael Palacios Rodríguez, no habiendo comparecido la parte recurrida.

Resultando que Don Ramón Irizarry, en representación de su esposa Doña María Antonia Cuevas y Mangual, con fecha cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y seis produjo demanda en juicio declarativo de menor cuantía ante el suprimido Juzgado de 1ª Instancia de Mayagüez contra Don Damián Frontera, con súplica de que fuera éste condenado por sentencia á pagar á su referida esposa la cantidad de mil cuatrocientos noventa y tres pesos, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, fundando dicha demanda en que por virtud de contrato de fletamento de la Goleta "Nueva Concepción," de la propiedad de su consorte, celebrado con Frontera para traer desde el punto de Maracaibo, en Venezuela, al de Mayagüez una considerable cantidad de cáscaras de mangle, cuya embarcación había de emprender viaje dentro de dos meses á contar desde el día diez y ocho de Marzo del citado año, siendo convenido que dos ó tres días antes de emprenderlo suscribirían ambas partes por duplicado la póliza de fletamento en la forma prevenida por el Código de Comercio, suspendió el tráfico de cabotaje á que la nave estaba dedicada en esta Isla, la reparó y equipó hasta ponerla en condiciones de hacer un viaje de travesía, contrató un piloto que era preciso, para dirigirla, preparó una carga de chinas y piña, que había de negociar en Curazao, punto de tránsito, admitió pasajeros que satisficieron el importe del pasaje, todo de acuerdo y con conocimiento de Frontera, y cuando la "Nueva Concepción" había de darse á la mar, se encontró con que el repetido Frontera estaba ausente en Europa sin que hubiera dejado instrucciones á su apoderado para el cumplimiento del contrato, por lo que se hizo éste imposible, siendo en su consecuencia infructuosos los gastos hechos para el equipo de la nave, que montaron á ochenta y nueve pesos, más doscientos treinta y cinco invertidos en la compra de un velamen, y trescientos diez y nueve pesos que representaban los sueldos, manutención de su tripulación mientras se hacían las reparaciones, perdiendo la mayor parte de los frutos comprados con lo que sufrió un perjuicio de doscientos cincuenta pesos, dejando de ganar su esposa doscientos pesos por haber impedido el cumplimiento del contrato con Frontera transportar de Luquillo á Mayagüez un cargamento de azúcar, y teniendo por último que enajenar el buque por dos mil quinientos pesos, de cuya suma descontó el comprador los quinientos pesos para conducir á Curazao los pasajeros que habían comprado su pasaje y reclamaban su conducción á dicho punto, cuyas partidas dan el total de mil cuatrocientos noventa y tres pesos, deducidos cien pesos que por su conducción á Curazao pagaron los pasajeros; habiendo invocado la parte demandante como fundamentos de derecho los artículos 1089, 1101, 1106, 1119, 1254 y 1356 del Código Civil, que tratan de las obligaciones y contratos y de la indemnización á que dá lugar su falta de cumplimiento.

Resultando que Don Damián Frontera al contestar la demanda, niega haber celebrado con la parte actora ni por escrito ni verbalmente el contrato de fletamento en que se funda la demanda, pues todo quedó en proyecto, en proposiciones recíprocas y en preliminares del negocio, sin que dicho contrato llegara á ultimarse, como también niega los daños y perjuicios que se alegan; é invocando los artículos 52 y 652 del Código de Comercio, que estima aplicables al caso, suplicó se le absolviera de la demanda, imponiendo perpétuo silencio y las costas á la parte actora.

Resultando que recibido el pleito á prueba y practicadas las propuestas por las partes, corridos los demás trámites del juicio, el Juez de 1ª Instancia de Mayagüez dictó sentencia en veinte y ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis, en la que absolvió de la demanda á Don Damián Frontera, con las costas á cargo de Don Ramón Irizarry, en la representación que ostentaba; sentencia que en grado de apelación

revocó el Tribunal del Distrito de San Juan, el que por la suya de veinte y cuatro de Julio último declaró con lugar la demanda, pero reducida ésta á quinientos treinta pesos á que ascienden los perjuicios que el demandado debe indemnizar al demandante, cuya cantidad devengará el interés de seis por ciento anual desde la fecha de la interposición de la demanda, ó sea desde el cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y seis, sin especial condenación de costas en ambas instancias, y fundando dicho fallo en que la cuestión que se debate no es la que versa sobre la existencia ó inexistencia del contrato de fletamento, si no la que se refiere á una obligación puramente civil, pues aunque el convenio no llegó á adquirir el carácter mercantil por falta de solemnidades exigidas por la ley, existió un vínculo jurídico desde el momento en que las partes se obligaron en la forma en que la Sala sentenciadora lo declara probado.

Resultando que contra esa sentencia del Tribunal del Distrito de San Juan interpuso Don Damián Frontera recurso de casación por infracción de ley, autorizado por la regla 73 de la Orden General número 113, de la serie de 1899, y por los números 1º y 7º del artículo 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, citando como infringidos: Primero. Los artículos 50, 51, 53, caso 1º, y 652 del Código de Comercio, que determinan los modos de probar la existencia de los contratos mercantiles, por cuanto el Tribunal sentenciador estima plenamente justificada en autos la obligación contraída por el demandado de fletar la goleta "Nueva Concepción", sin haber existido el contrato de fletamento, el cual no puede probarse en modo alguno por la declaración de testigos, si no por medio de la correspondiente póliza, que no se extendió, ni por tanto pudo traerse á los autos, condenando no obstante al F. ontera á una indemnización, que solo podía derivarse del incumplimiento de dicho contrato.—Segundo. El principio jurídico "Actore non probante, reus est absolvendus," consagrado como doctrina legal por el Tribunal Supremo de España en sentencias de veinte y uno de Enero de mil ochocientos sesenta y siete, veinte y dos de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve, siete de Marzo de mil ochocientos setenta y cuatro, y veinte y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y dos, en el concepto de que no habiéndose probado en la forma establecida por el Código de comercio la existencia del contrato de fletamento, no ha podido exigirse á Frontera una obligación que se deriva del incumplimiento de tal contrato.—Tercero. Infracción de los artículos 1089, 1191, 1245 y 1248 del Código civil, por aplicación indebida, toda vez que Frontera á nada se obligó, y en su consecuencia no ha podido incurrir en dolo, negligencia ó morosidad en el cumplimiento de obligaciones que no existieron, por no existir la causa de que podrían derivarse, ó sea la existencia del contrato de fletamento.

Visto, siendo ponente el Juez Asociado suplente Don Juan de Guzmán Benitez.

Considerando que la infracción señalada en el primer motivo del recurso parte del erróneo supuesto de que la sentencia recurrida considera probada la existencia del contrato de fletamento, cuando por el contrario, el fallo dice expresamente que dicho contrato mercantil no llegó á perfeccionarse, y que la indemnización de daños y perjuicios se funda en el incumplimiento de una obligación civil, que se declara probada, cual es la de fletar la goleta "Concepción" y firmar el conocimiento dos ó tres días antes de emprender el viaje; con cuyo motivo el dueño del barco tenía que poner á éste en condiciones de cumplir lo convenido, como declara la Sala haberlo hecho; por cuyas razones no se han infringido los preceptos del Código mercantil citados en el primer motivo del recurso.

Considerando que por la misma razón antes expresada no se ha infringido el principio jurídico "Actore non probante, reus est absolvendus", pues la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora no se refiere al contrato mercantil, en cuyo concepto la